

XXXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ELECTORALES:

América Latina y El Caribe, elecciones y virajes políticos

Dra. Lizeth Pérez Cárdenas

Instituto Nacional Electoral (INE)

lizperez.cardenas@gmail.com

Mtra. Marisol Vázquez piñón

Instituto Nacional Electoral (INE)

vazquez.pinon.marisol@gmail.com

Acciones afirmativas aprobadas en México para grupos en situación de discriminación en la elección concurrente de 2021. Diseños, retos y resultados

Resumen:

La elección concurrente de 2021 en México además de ser la más grande por el número de cargos electos, también fue la más incluyente, ello ya que tanto a nivel federal como local se aprobaron cuotas para personas en situación de discriminación, de las cuales se pueden identificar los siguientes grupos: personas indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero, jóvenes, adultas mayores y con discapacidad. El objetivo de la presente ponencia es señalar cuáles fueron los diferentes diseños adoptados en ambos niveles para implementar estas medidas de nivelación; cuáles son los retos que se presentaron para lograr su cumplimiento; así como el estudio de los obstáculos que se presentaron, entre los que se identifican la simulación de las identidades en las postulaciones; finalmente, se aportan datos con los resultados obtenidos, los cuales dan cuenta del número de personas que con corte a marzo de 2022 desempeñan un cargo y pertenecen a alguno de estos grupos prioritarios. La información se ha construido en conjunto desde las instituciones electorales, tanto el Instituto Nacional Electoral, como los 32 Organismos Públicos Locales (OPL).

Introducción

La historia democrática de México se inscribe dentro de un conjunto de instituciones, acciones y estrategias que tienen como finalidad garantizar el efectivo derecho de la ciudadanía a participar y ejercer de forma plena los derechos políticos y electorales. El proceso electoral concurrente de 2020-2021 forma parte de un ejercicio de democracia paritaria e incluyente, esto como resultado de la reforma aprobada en 2019, conocida como “paridad en todo” (2019), así como la implementación de distintas acciones afirmativas para grupos en situación de discriminación (Pérez, 2021).

El mencionado proceso electoral representó para el sistema electoral mexicano una serie de retos; por un lado, se eligieron más de veinte mil cargos de distintos niveles: federales (diputaciones), y locales (gubernaturas, diputaciones, presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y cuarto nivel); y, por otro, porque la implementación de las acciones afirmativas representó una oportunidad de participación política para los grupos en situación de discriminación, un mandato para los partidos políticos, y un desafío para las autoridades electorales. Por lo cual, a más de un año de la elección del 6 de junio de 2021 es necesario revisar los resultados, retos y desafíos que las acciones afirmativas plantean en la construcción de una democracia paritaria e incluyente.

Esta ponencia se divide en tres apartados: el primero, aborda los diferentes diseños adoptados tanto a nivel federal como local para implementar las medidas de nivelación; el segundo apartado recupera los retos y obstáculos que se presentaron en la implementación de las diversas acciones; y en el tercer apartado, se presentan los resultados obtenidos con la finalidad de identificar el impacto en los escenarios políticos.

Las acciones afirmativas adoptadas para grupos en situación de discriminación por el sistema electoral mexicano dan cuenta del reconocimiento a la diversidad y la desigualdad presente en el territorio nacional, por lo cual, es necesario seguir analizando y construyendo herramientas que permitan su implementación de forma efectiva, potenciando los derechos políticos y electorales de las poblaciones históricamente discriminadas.

De las acciones afirmativas en el territorio nacional

México es un país diverso con profundas desigualdades que afectan de forma sistemática el ejercicio de los derechos humanos, entre ellos los derechos políticos y electorales. Por ello, en los últimos años las instituciones han implementado distintas acciones para reducir la subrepresentación política de diferentes grupos en situación de discriminación.

En el ámbito electoral particularmente, se han incorporado acciones afirmativas que establecen mecanismos para promover la participación de personas de estos grupos en los espacios de representación política, esto a través de recomendaciones y/o cupos específicos. Antes de continuar, consideramos necesario señalar que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación señala:

Artículo 15 Séptimus. Las acciones afirmativas son las medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones. Se adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser legítimas y respetar los principios de justicia y proporcionalidad. Estas medidas no serán consideradas discriminatorias en términos del artículo 5 de la presente Ley (Cámara de Diputados, 2003).

En este sentido, de manera reciente y paulatina, tanto a nivel federal como a nivel local se han establecido cupos específicos en candidaturas cuyo objetivo es lograr la representación política de personas que históricamente han sido discriminadas. El laboratorio de las cuotas en el ámbito electoral en nuestro país tiene sus orígenes en las cuotas de género establecidas por primera vez en 1996 y como su momento de cierre el año 2014 cuando con la reforma electoral probada se estableció la paridad como principio constitucional (Vázquez, 2021). Posteriormente, en el proceso electoral federal del año 2018, por primera vez en la historia de México se establecen cuotas específicas en diputaciones para personas indígenas (Hevia, 2019). A nivel local, Hidalgo es de las primeras entidades en reservar candidaturas también para este grupo, en diputaciones locales, al aprobarlas en el proceso electoral de 2018.

Los resultados de las cuotas para personas indígenas, así como los diferentes problemas que estuvieron presentes, tales como la simulación o usurpación de identidades, pusieron en la mira no solo la efectividad de dichas acciones, sino también los retos que se presentaban rumbo a los futuros procesos electorales. Para esta investigación es importante apartarse de la visión centralista, al analizar sólo lo que acontece a nivel federal, México al ser una república federativa aporta elementos importantes para analizar qué ha pasado con las cuotas para dichos grupos en lo local y la riqueza de la información es relevante. En este sentido, prácticamente cada una de las entidades federativas incorporó a su manera, y derivado de sus propias necesidades y contextos acciones tendientes a revertir los efectos de la desigualdad, de tal suerte que su composición demográfica y algunas otras variables sociales y políticas dieron pie a la implementación de estas acciones.

Atendiendo al principio de progresividad, a nivel federal, el 18 de noviembre de 2020 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en el Acuerdo INE/CG572/2020 los lineamientos que contemplaban acciones afirmativas para las personas indígenas, los cuales abarcaban más distritos que los considerados en 2018; este acuerdo fue impugnado por diversos actores y partidos políticos, por lo que el 29 de diciembre de 2020 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió la Sentencia SUP-RAP-121/2020 en la que mandata incorporar cuotas no solo para personas indígenas, sino también para personas con discapacidad; derivado de esta sentencia, el 15 de enero de 2021 el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG18/2021 en el que se consideró cuotas para personas indígenas, personas con discapacidad, personas afromexicanas y personas de la diversidad, lo cual marcaba un punto de inflexión en el reconocimiento de los grupos beneficiarios de cuotas en las candidaturas a diputaciones federales.

No obstante, el acuerdo fue nuevamente impugnado y el 24 de febrero de 2021 la Sala Superior emitió la sentencia SUP-RAP-21/2021 en la que exhortaba al INE a incluir cuotas además de las aprobadas, para personas migrantes y residentes en el extranjero; por ello, el 4 de marzo de 2021 a través del Acuerdo INE/CG160/2021 se incorporó a este último grupo, lo cual significó que el proceso electoral incluiría cuotas en mayoría relativa y/o en

representación proporcional para cinco grupos (Imagen 1): personas indígenas (21 de Mayoría Relativa y 9 de Representación proporcional), con discapacidad (6 de Mayoría Relativa y 2 de Representación Proporcional), afromexicanas (3 de Mayoría Relativa y 1 de Representación Proporcional), de la diversidad sexual (2 de Mayoría Relativa y 1 de Representación Proporcional); así como migrantes y residentes en el extranjero (5 de Representación Proporcional), estos cupos específicos considerados para las personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación no representaban un techo, sino un piso mínimo para la incorporación de la diversidad en los distintos espacios de representación popular, y es relevante mencionar que en cada uno se debía cumplir con el principio de paridad. Entonces, un hallazgo relevante es que el reconocimiento de las cuotas para grupos en situación de discriminación se da por dos vías: por impulso de las instituciones electorales administrativas, o bien por la exigencia de instituciones jurisdiccionales, que así lo mandatan como resultados de las impugnaciones. No menos relevante es señalar que estos avances no han sido producto de la autoexigencia de los propios partidos políticos.

Imagen 1: Acciones Afirmativas aprobadas para el proceso electoral federal 2020-2021



Fuente: Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND), INE, 2021.

La confección de las cuotas estuvo a cargo del INE, quién consideró para su diseño distintas variables, entre las que destacan los datos sociodemográficos de la población beneficiada. No obstante, vale la pena señalar que en ese momento no se contaba con instrumentos estadísticos suficientes, lo cual en la actualidad no se ha modificado completamente pues si bien instancias como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) han realizado recientemente ejercicios para identificar a grupos en situación de discriminación, por ejemplo, con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género realizada en 2022, aun es necesario ampliar el conocimiento que tenemos sobre éstos y las mejores formas de identificarles para medir estadísticamente su peso poblacional.

Un dato positivo es que, a nivel local, en las 32 entidades hubo un mosaico heterogéneo en los grupos considerados para el diseño de cuotas, así como para su aplicación obligatoria o no para diversos cargos. Su aprobación derivó -como a nivel federal- de la iniciativa de los institutos locales electorales, o bien de mandatos jurisdiccionales, no así de la iniciativa de los partidos políticos. Derivado de los trabajos de la UTIGyND y la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVO) del INE se identificaron las acciones implementadas a nivel local, a continuación, se presenta la imagen desagregada por entidad:

Imagen 2: Acciones afirmativas aprobadas a nivel federal y por entidad federativa



Fuente: Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND), INE, 2021.

Como se puede observar, de forma adicional a las cinco acciones afirmativas implementadas a nivel federal, a nivel local se incluyeron cuotas para personas jóvenes y para personas adultas mayores. Del gráfico hay varios elementos de análisis, entre las que destacan las siguientes:

1. Estado de México y Tamaulipas fueron las únicas entidades del país que no aprobaron ninguna acción afirmativa para grupos en situación de discriminación en ese proceso electoral.

2. La acción afirmativa para personas indígenas fue la más recurrente, ya que 28 de las 32 entidades la incorporaron, un dato alentador ya que México es una nación pluricultural reconocida constitucionalmente.
3. La segunda acción más implementada a nivel local fue la de personas jóvenes, la cual como ya se señaló a nivel federal no fue considerada, estuvo presente en 21 de las 32 entidades.
4. La tercera acción más implementada fue la que beneficia a personas de la diversidad sexual, en 20 de las 32 entidades la aprobaron lo que da cuenta del avance en el reconocimiento de los derechos de esa comunidad.
5. La acción menos recurrente fue la de personas adultas mayores, aplicada únicamente en tres entidades federativas (Morelos, Oaxaca y Yucatán)
6. La acción afirmativa para personas afromexicanas se aprobó en la mayoría de las entidades caracterizadas por la presencia de dicha población: Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México, esto de acuerdo con datos del Censo Poblacional realizado por INEGI en 2020 (INEGI, 2020).
7. La acción afirmativa para personas con discapacidad que fue una de las primeras que logró aprobarse a nivel federal, solo alcanzo a ser incluida en la mitad de las entidades del país, es decir, en 16 estados.
8. La acción afirmativa para personas migrantes y residentes en el extranjero fue la que menos se aprobó en lo local, esto a pesar de que muchos estados se caracterizan por tener una gran cantidad de mexicanas mexicanos que deciden migrar a otros países, particularmente a Estados Unidos. Sólo cinco entidades reconocieron cuotas para dicho grupo Ciudad de México, Durango, Guerrero, Nayarit y Zacatecas.

Es importante señalar que las acciones afirmativas expresadas en cuotas no siempre consideran cupos específicos, sino que su aplicación tiene características heterogéneas (Greenawalt, 1983), por ejemplo en México hubo entidades que solo consideraron acciones afirmativas para el nivel municipal, dejando de lado las diputaciones locales, tal es el caso de Jalisco; otras entidades señalaban los grupos que podían beneficiarse de la acción afirmativa en lo general, pero no la desglosaban para cada uno de los grupos, por ejemplo, Yucatán o Coahuila; y también, hubo casos de estados que consideraron acciones afirmativas, pero estas

no tenían carácter de obligatorio, fueron recomendaciones; todo esto se tradujo en que la aplicación de las acciones afirmativas fuera muy diversa y que por lo tanto, los resultados no fueran similares en los diferentes espacios.

Las complejidades de las acciones afirmativas: diseño, retos y obstáculos

A nivel federal las acciones afirmativas para los cinco grupos en situación de discriminación consideraron criterios claros con la finalidad de alcanzar los mejores resultados —no lo lograron— no obstante, es necesario evidenciar cuáles fueron los principales retos, así como las alternativas que, en principio, tenían como finalidad salvaguardar la implementación de las medidas.

La complejidad de la aplicación de dichas acciones puede ser analizada desde distintos frentes, uno de ellos es el de la identidad y el reconocimiento. Ante ello, y por los criterios de la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las autoridades electorales han solicitado a los partidos políticos requisitos para la postulación de algunas de estas candidaturas (autoadscripción calificada), por ejemplo:

- Personas indígenas: Deberán acreditar el vínculo que la persona candidata tiene con su comunidad.
- Personas con discapacidad: Deberán acreditar la discapacidad permanente de la persona candidata.
- Personas afromexicanas: Deberán elaborar una declaración bajo protesta de decir verdad, de que forman parte de algún pueblo o comunidad afromexicana.
- Personas migrantes y/o residentes en el extranjero: Estas deberán presentar una constancia (credencial para votar desde el extranjero o inscripción en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero) que acredite su residencia.
- Para las postulaciones de personas de la diversidad sexual se requieren la autoadscripción.

Hasta este punto los diferentes requisitos parecían suficientes para evitar cualquier tipo de problemática, sin embargo, la instrumentación de las diversas medidas por sí mismas

representó un importante reto para las instituciones electorales. A continuación, desglosaremos por partes lo sucedido.

Respecto de las personas indígenas, la autoadscripción es un derecho que está reconocido en diferentes instrumentos nacionales e internacionales, tales como el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; empero, desde el proceso electoral de 2018, Sala Superior del TEPJF señaló la necesidad de establecer la autoadscripción calificada, lo que significa que “en materia electoral es necesario acreditar un vínculo con la comunidad cuando se aspira a una candidatura por una acción afirmativa indígena” (Central Electoral, 2022), esto con la finalidad de asegurar la participación real y efectiva de la ciudadanía que pertenece a este grupo.

La autoadscripción calificada en teoría resultaba la medida idónea para evitar simulaciones, no obstante, hubo diferentes denuncias tanto en los medios de comunicación como mediante juicios electorales donde se denunció candidaturas de personas que no pertenecían a dicha población y que habían presentado constancias fabricadas para cumplir con el requisito, tal es el caso del distrito electoral federal indígena 2, cuyo candidato Antonio Valdez Wendo, se registró en el municipio de Bochil, Chiapas, por la coalición Juntos Haremos Historia y cuya candidatura fue revocada porque el candidato no logró demostrar un vínculo comunitario con alguno de los pueblos indígenas Tsotsil, Tseltal, Ch’ol o Zoque (UNAM, 2018).

Para el proceso electoral de 2021 se repitió esta problemática, por ejemplo, el 9 de mayo de 2021 en *El Economista* fue publicada la nota: “Despojan a indígenas de candidaturas reservadas a comunidades originarias” (Badillo, 2021) en dónde se destacan algunos casos de simulación de la identidad indígena con nombres y apellidos. Lamentablemente, la usurpación tuvo como resultado que varias de las personas que llegaron a la Cámara de Diputados y Diputadas por dicha cuota no fueran parte de los pueblos y comunidades indígenas.

En el caso de personas de la diversidad sexual, no era necesario presentar ninguna documentación o constancia, no obstante, la simulación también se hizo presente; por ejemplo, el portal *Expansión* el 17 de mayo de 2021 publicó la nota “#Elecciones2021: Acciones a favor de la diversidad sexual provocan “simulación” (Expansión Política, 2021), ya que algunos hombres falsearon su identidad genérica para poder ocupar estos espacios.

La usurpación de las identidades es un grave problema para las acciones afirmativas ya que pone en jaque la efectividad de estas medidas, esto porque la finalidad de dichas acciones es brindar a las poblaciones que se encuentran en situación de discriminación, los elementos para que puedan tener condiciones que nivelen las desigualdades y les permitan incorporarse a los espacios de representación política, lo que les permita impulsar una agenda a favor de cada grupo, por lo tanto cuando se hace uso de la falsificación de documentos y/o las personas se inscriben en identidades que no les corresponden, afectan de forma sistemática el espíritu de dichas medidas, retrasando así la posibilidad de tener sociedad más representativas e igualitarias.

Adicional a la usurpación de identidades, nos encontramos con el tema de los partidos políticos, los cuales en nuestro país se constituyen como los principales actores de la esfera político-electoral, ya que son ellos los que de forma preponderante tienen la facultad de proponer y postular candidaturas —adicional a las candidaturas independientes—. Los partidos políticos son una pieza clave en la instrumentación de las acciones afirmativas, y como pudimos observar en los últimos dos procesos electorales, fueron también ellos los que presentaron mayores resistencias para abrir espacios a dichas poblaciones.

Los partidos políticos argumentaron problemas en el cumplimiento de las cuotas ya que se aprobaron ya muy avanzado el proceso electoral, cuando éstos ya habían cerrado los procesos de selección de candidaturas, no obstante, llama la atención la poca cercanía que los partidos tienen con dichas poblaciones para poder cumplir con las cuotas establecidas, los partidos deben ser canales de representación de la sociedad y sin embargo observamos que tal como ocurría con las mujeres, el principal argumento para negarse a cumplir es que no había militancia de estos grupos interesadas en ser candidatas, tampoco se puede dejar de lado la

falta de compromiso de estas instituciones con los grupos discriminados, pues si no hubiera sido por la obligatoriedad de las cuotas no se hubiera avanzado de forma voluntaria hacia ese escenario.

Otro argumento esgrimido por los partidos políticos en las mesas de trabajo y foros realizados tenía que ver con el desinterés de estos grupos en participar políticamente, el cual se desmiente rápidamente si consideramos que las acciones afirmativas fueron resultado también de las propias exigencias de las personas que forman parte de los grupos en situación de discriminación, dado que a través de sus propias organizaciones consiguieron la aprobación de las diversas acciones (INE, 2021).

Los resultados de las acciones afirmativas

El 6 de junio de 2021 se llevó a cabo la elección concurrente con los cargos mencionados en la primera parte de este trabajo. Respecto a los resultados de las acciones afirmativas a nivel federal, 65 personas fueron electas por dichas acciones, es decir, que 15 personas más de las 50 planteadas llegaron a la Cámara de Diputados y Diputadas, lo cual en términos numéricos plantea un avance importante y un éxito innegable de dichas medidas, no obstante, cuando se revisan con detenimiento los resultados, estos pueden tener lecturas diversas. A continuación, presentamos un cuadro que nos permite observar cuál fue la conformación lograda:

Imagen 3: Acciones afirmativas. Diputaciones por partido político a nivel nacional a nivel federal



Fuente: Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND), INE, 2021.

De los resultados obtenidos a nivel federal se destacan los siguientes hallazgos: de las 65 personas electas, el número de mujeres superó al de hombres por 17, es decir, hubo un total de 41 mujeres electas por acción afirmativa vs 24 hombres, este hecho es importante recuperarlo ya que la reforma “paridad en todo” impactó de forma positiva la participación política de las mujeres que forman parte de grupos que se encuentran en situación de discriminación.

Del dato anterior también podemos destacar que 18 mujeres fueron electas por mayoría relativa, lo que indica que fueron competitivas y resultaron ganadoras, esto también

desmiente el argumento usado mucho tiempo por los partidos políticos respecto de la poca rentabilidad que representaba para ellos la participación de las mujeres, en este caso mujeres pertenecientes a grupos en situación de discriminación lo que indica una relación de interseccionalidad en sus identidades.

Otro dato relevante es que la acción afirmativa con más personas electas fue la de indígenas, con un total de 36, mientras que la acción con menos personas electas fue la de personas de la diversidad sexual con un total de cuatro. Este dato es evidente, en tanto que el número de cupos considerado para personas indígenas era el más alto.

Por otro lado, llama también la atención que todas las acciones afirmativas fueron cubiertas en su planteamiento inicial e incluso algunas de ellas fueron superadas, como la de personas indígenas y personas migrantes y/o residentes en el extranjero.

Respecto al escenario de los partidos políticos, Morena fue el partido con el mayor número de personas electas por acción afirmativa, con un total de 32, lo cual es predecible en tanto que es el partido mayoritario en el país. Los partidos políticos con el menor número de personas electas por acción afirmativa fueron: PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Los otros partidos políticos quedaron de la siguiente manera: el PAN alcanzó 12 personas electas por acción afirmativa, el PVEM 10 personas y el PRI ocho personas.

Como lo hemos mencionado en términos cuantitativos podemos ver un importante avance, sin embargo, sería necesario evaluar la medida no solo en términos numéricos, sino también cualitativos con la finalidad de ver el impacto de la llegada de personas que forman parte de grupos en situación de discriminación para la acción legislativa y las agendas que impulsan.

Por otro lado, es también importante indagar sobre los resultados a nivel local, por lo que como resultado del “Diagnóstico el alcance y los resultados de la paridad. Procesos electorales federales y locales 2017-2018 y 2020-2021” elaborado por la UTIGyND con información de la UTVO y los Organismos Públicos Locales (OPL), se integraron datos que dan cuenta del impacto de la aplicación de las acciones afirmativas a nivel local, en donde se

puede observar que 4,528 personas de grupos en situación de discriminación fueron electas para desempeñar un cargo de elección popular, ya sea en diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías o sindicaturas. En el siguiente cuadro se puede apreciar la distribución y el alcance de los resultados:

Cuadro 1. Personas propietarias electas en congresos y municipios, en cada entidad, que pertenecen a un grupo en situación de discriminación, 2021

Estado	Indígenas	Con Discapacidad	Diversidad Sexual	Adultas mayores	Jóvenes	Afromexicanas	Migrantes	Total	Hombres	Mujeres	Persona no binaria
Aguascalientes		2	3					5	2	3	
Baja California	12	2	1		5			20	10	10	
Baja California Sur	4	1	2		1	2		10	2	8	
Campeche	2	2			28			32	21	11	
Chiapas	331			28	215			574	223	351	
Chihuahua	60	11	2	90	122			285	127	158	
Ciudad de México	2	1	3		40	1	1	48	22	26	
Coahuila	1					1		2	1	1	
Colima				5	38			43	12	31	
Durango	2				1			3	1	2	
Estado de México				76	195			271	131	140	
Guanajuato	10							10	4	6	
Guerrero	202		28			9		239	124	115	
Hidalgo	5	2	1		1			9	4	5	
Jalisco	21	9	1		386			417	171	246	
Michoacán	8	12	15		14			49	19	30	
Morelos	85	9	16	24	23	13		170	76	94	
Nayarit	25			15	33			73	31	42	
Nuevo León	8	4	8		188			208	91	115	2
Oaxaca	561	35	12	59		24		691	349	342	
Puebla	178	2	1					181	91	90	
Querétaro	4			3	8			15	5	10	
Quintana Roo	34		3	1	26	1		65	34	31	
San Luis Potosí	28	1			67			96	37	59	
Sinaloa	7		1					8	3	5	
Sonora	21	3	4	62	45			135	68	67	
Tabasco	2			14	30			46	9	37	
Tamaulipas				77	45			122	61	61	

Tlaxcala	5		3		159			167	51	116	
Veracruz	70		1		72	3		146	71	74	1
Yucatán	67	4	8	38	85			202	98	104	
Zacatecas	1	2	7		174		2	186	66	120	
Totales	1,756	102	120	492	2,001	54	3	4,528	2,015	2,510	3

Fuente: Cuadro 8 del Diagnóstico el alcance y los resultados de la paridad. Procesos electorales federales y locales 2017-2018 y 2020-2021, INE, 2022.

Sobre estos datos es importante señalar que, si bien no todas las entidades aplicaron acciones afirmativas obligatorias para los diferentes grupos en situación de discriminación, sí se contabilizaron los espacios que fueron alcanzados por personas de dichos grupos. En total 4,528 personas de grupos en situación de discriminación llegaron a un espacio de toma de decisiones, de ahí el grupo más favorecido fueron los jóvenes con 2,001 personas, le siguieron los indígenas con 1,756 personas; personas adultas mayores con 492, las personas de la diversidad sexual con 120, personas con discapacidad 102, personas afromexicanas 54; y finalmente, personas migrantes tres. Del total de resultados, hubo un mayor número de mujeres con 2,510, mientras que fueron 2,015 hombres y tres personas que se identificaron como no binarias. Como se ha señalado los resultados parecen ser prometedores, ya que dan cuenta de una conformación política diversa tal como lo es la sociedad mexicana.

Reflexiones finales

La democracia en México avanza nuevamente ahora con el reconocimiento de los grupos en situación de discriminación y la importancia de proteger su derecho a la representación. Así como históricamente las mujeres tuvieron que luchar por tener presencia en la esfera política y de toma decisiones, en la actualidad diversos grupos en situación de discriminación se han organizado para a través de los mecanismos institucionales, exigir a los partidos políticos cuotas para la postulación de candidaturas. En este sentido tanto las instituciones electorales administrativas como jurisdiccionales han realizado acciones para que, de forma progresiva se exija a los partidos políticos la postulación de dichos grupos.

Las acciones afirmativas representan en México el reconocimiento de la amplia diversidad, por lo cual su instrumentación y optimización son imprescindibles para lograr la representación de toda la ciudadanía. Si bien, las acciones afirmativas han enfrentado un

cúmulo de retos, es urgente que los distintos actores institucionales establezcan candados que permitan que efectivamente sean las personas a las que se dirigen las acciones, las que se vean beneficiadas.

De acuerdo con la investigación existen hallazgos positivos, uno de ellos es que van dos procesos electorales concurrentes donde se implementan acciones afirmativas para grupos en situación de discriminación. Otro aspecto relevante es la progresividad, estas acciones se han ampliado a cada vez más grupos, empezando primero con indígenas y posteriormente considerando los otros cuatro, además se han considerado para cargos ya no sólo de mayoría relativa sino también de representación proporcional lo que representa una representación completa en el sistema electoral mexicano el cual es mixto.

No menos relevante es la representación simbólica, la importancia de que en la cámara de diputados y diputadas se escuchen otras voces, otros idiomas, se vean nuevos referentes para personas que históricamente tuvieron un menor acceso a servicios, oportunidades y derechos.

Si bien existen retos importantes para consolidar la democracia plural y paritaria, lo cual pasa por el compromiso de los partidos políticos para postular candidaturas que realmente pertenezcan a dichos grupos, lo cierto es que desde la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil existe una exigencia para que así sea.

Será importante ver cómo se traduce la elección de dichas personas en representación, iniciativas y agendas también plurales y diversas, ya que ese finalmente es el propósito y origen de las acciones afirmativas.

Bibliografía

Badillo, Diego (2021). “Despojan a indígenas de candidaturas reservadas a comunidades originarias”, en El Economista. Disponible en: <https://www.eleconomista.com.mx/politica/Despojan-a-indigenas-de-candidaturas-reservadas-a-comunidades-originarias-20210509-0002.html>

Cámara de Diputados (2003). Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Diario Oficial de la Federación. Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfped.htm>

Central Electoral (2022). ¿Sabes qué es la Autoadscripción Calificada?, Instituto Nacional Electoral. Disponible en: <https://centralectoral.ine.mx/2022/06/15/sabes-que-es-la-autoadscpcion-calificada/>

Expansión Política (2021). “#Elecciones2021: Acciones a favor de la diversidad sexual provocan “simulación”, en Expansión. Disponible en: <https://politica.expansion.mx/mexico/2021/05/17/elecciones2021-acciones-a-favor-de-la-diversidad-sexual-provocan-simulacion>

Greenwalt, Kent (1983). Discrimination and Reverse Discrimination, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1983.

Hevia, Teresa (Coordinadora) (2019). El impacto de las medidas afirmativas de género en el registro de candidaturas en el proceso electoral federal 2017-2018”. Disponible en: <https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2020/05/Impacto-medidas-afirmativas.pdf>

Instituto Nacional Electoral (INE) (2021) “Foro virtual: Evaluación y prospectiva de las acciones afirmativas en los procesos electorales federales”. Disponible en: <https://www.facebook.com/INEMexico/videos/365484728415871/>

— (INE) (2022) Diagnóstico el alcance y los resultados de la paridad. Procesos electorales federales y locales 2017-2018 y 2020-2021. Disponible en: https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2022/08/cigynd_3so_200422_p3_VF050722.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2022). Censo de Población y Vivienda 2020. Disponible en:

<https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/afromexicanos.aspx?tema=P#:~:text=En%202020%2C%20en%20M%C3%A9xico%20viven,son%20mujeres%20y%2050%20%25%20hombr,es.>

Pérez, Lizeth (2021) La participación política de las mujeres en tiempos de paridad. Ichan Tecolotl. Año 32, numero 350. Revista de divulgación enfocada en temas de antropología, ciencias sociales y humanidades, con una periodicidad mensual y editada por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Disponible en: <https://ichan.ciesas.edu.mx/16971-2/>

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (2018) “TEPJF revoca registro a candidato a diputación federal en distrito indígena”. Disponible en: https://cronicaelectoral.juridicas.unam.mx/posts/post_index/826-tepjf-revoca-registro-a-candidato-a-diputacion-federal-en-distrito-indigena

Vázquez, Marisol (2021) La paridad echando raíces: enseñanzas de las elecciones 2021 en México. Ichan Tecolotl. Año 32, numero 350. Revista de divulgación enfocada en temas de antropología, ciencias sociales y humanidades, con una periodicidad mensual y editada por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Disponible en: <https://ichan.ciesas.edu.mx/la-paridad-echando-raices-ensenanzas-de-las-elecciones-2021-en-mexico/>